DE LA ESTRATEGIA MILITAR A LA EXACERBACIÓN DEL DISCURSO EN EL PERIODO 2002-2016⁵⁰

Cr. (RA) Cipriano Peña Chivatá⁵¹
Emil Villamizar Osorio⁵²

El secuestro del senador Jorge Eduardo Gechem Turbay a manos de las FARC, ocurrido el 20 de febrero de 2002, no sólo significó el posterior anuncio por parte del presidente Andrés Pastrana de la ruptura definitiva de los diálogos y la negociación, sino que marcó el inicio de una nueva etapa en la confrontación militar en el marco del conflicto armado colombiano. Esta etapa sólo encontraría una posible superación 14 años después, con la firma del Acuerdo de Paz de La Habana. Romper los diálogos del Caguán no sólo fue la conclusión de 1.139 días de una oportunidad de paz perdida entre las resistencias de una negociación ambigua, también fue el “tránsito por una tesitura ambivalente, que permitirá entender lo que va a suceder en el transcurso de la década” (Ríos, 2015, p. 72). Esta fue una década caracterizada por el despliegue e incremento de las acciones armadas en todo el territorio nacional por parte de esta organización subversiva, y por el nivel de degradación del conflicto armado en Colombia, que trascendió al escenario de los delitos de lesa humanidad, calificados por la comunidad internacional como acciones de carácter terrorista por el alto nivel de afectación no solo a los estándares globales de seguridad y defensa nacional, sino a la seguridad humana y regional, por la vinculación de esta organización

50 Capítulo de libro vinculado al proyecto de investigación “Las relaciones y fenómenos del redimensionamiento de las FARC y su posicionamiento estratégico en la Comunidad Internacional”, del grupo de investigación “Masa Crítica” de la Escuela Superior de Guerra.

51 Cr. (RA) Docente investigador del Departamento de Estrategia de la Escuela Superior de Guerra, coordinador de la línea de investigación Geopolítica Estrategia y Seguridad Hemisférica; Especialización en Seguridad y Defensa Nacional, Especialización en Administración de la Seguridad, Magister en Relaciones y Negocios Internacionales. Magister en Fortalecimiento de la Democracia (USA), profesor invitado Academia de Guerra en Chile.

52 Abogado Universidad Nacional de Colombia, graduando en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario, pasante en investigación del departamento de Estrategia de la Escuela Superior de Guerra.

con una telaraña delincencial a nivel global con otras organizaciones terroristas e independentistas.

La organización subversiva venía fortaleciendo su estrategia de la toma del poder por la vía armada, y desde la década de los noventa había efectuado un despliegue militar, pasando de la guerra de guerrillas a la guerra de movimiento, ejerciendo presión intimidación y cogobierno principalmente a nivel rural.

De igual forma, el gobierno nacional, entendiendo la problemática y amenaza para la seguridad y defensa nacional, había iniciado un proceso de profesionalización y fortalecimiento de las capacidades y medios militares como respuesta a la amenaza persistente, para lo cual había presentado en el plan de gobierno la posibilidad de contar con el apoyo de la comunidad internacional, en especial de los Estados Unidos con la estrategia que daría vida al Plan Colombia.

Es justo en este período de guerra encuadrado desde la ruptura de los diálogos de paz del gobierno del presidente Andrés Pastrana, pasando por la política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe, y el posterior desenlace en las negociaciones de paz del presidente Juan Manuel Santos, en donde se enmarca el objeto de estudio del presente capítulo, por cuanto se logra evidenciar la necesidad de analizar la evolución discursiva de las FARC entre los años 2002 y 2016. En este lapso hay una serie de factores, hechos, y variables de carácter político, económico, social y militar que inciden fundamentalmente no solo en el cambio del discurso, sino en la estrategia para la toma del poder por parte de esta organización. Para comprender la transformación discursiva y la naturaleza de una organización político-militar que había definido desde su creación como parte fundamental la estrategia la teoría Marxista - Leninista de la construcción de la estructura social de proletariado y toma del poder por la vía armada, y que lentamente se reconvierte en una estructura exclusivamente política, es necesario analizar y reconstruir la forma cómo, a través de su discurso, sortearon uno de los momentos más complejos de su historia reciente, así como la negociación de su dejación de armas con miras al cumplimiento parcial del segundo componente de su plan estratégico: la salida negociada al conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

En este capítulo se mostrará que el discurso político de las FARC es el entramado dinámico de tres componentes. Por una parte, un discurso socialista enraizado en sus orígenes como resistencia campesina junto al Partido Comunista, que tiene como función dar la perspectiva estratégica al grupo insurgente, en cuanto delimita el modelo político, económico y cultural que encuentran necesario para

la sociedad colombiana. En segundo lugar, un discurso bolivariano que tiene su génesis, como se ha explicado con anterioridad, en los desarrollos de la Séptima Conferencia y su reafirmación en la década de los noventa, con posterioridad a la caída del bloque soviético, que tiene como finalidad la “colombianización” del marxismo-leninismo (Palacios, 2008), generando un hilo conductor con la gesta independentista. Finalmente, un discurso coyuntural con el que enfrentan la lucha político-militar en el día a día y responde al desenvolvimiento diario de la política nacional e internacional.

El capítulo se encuentra estructurado de la siguiente forma: en primer lugar se desarrollan los contextos políticos a nivel internacional, regional y local, que condicionaron el devenir discursivo de la guerrilla. En segundo lugar, se expone el análisis sistemático del discurso de las FARC en sus tres dimensiones, en otras palabras, el socialismo, el bolivarianismo y la coyuntura, análisis resultante de las fuentes primarias que se revisaron: comunicados, declaraciones, revista *Resistencia*, revista *Dignidad*, separatas, videos y entrevistas de miembros de secretariado. Finalmente, se esbozan algunas conclusiones que se consideran relevantes en cuanto a la capacidad de adaptación discursiva de las FARC.

INTERNACIONALIZACIÓN ESTATAL DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA Y LA GUERRA CONTRA EL TERRORISMO GLOBAL

Si bien es posible afirmar que la primera estrategia medianamente sistemática de internacionalización política y militar del conflicto armado colombiano se da durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana (Borda, 2012), los orígenes de este proceso pueden ser rastreados hasta las denuncias que haría en su momento Jorge Eliécer Gaitán, referentes a la presunta compra ilegal de armamento por parte del presidente conservador Mariano Ospina al gobierno de los Estados Unidos, con el objeto de mantener el orden público ante los permanentes choques con los sectores liberales, a quienes presentó como brazo del comunismo internacional (Borda, 2012). A partir de este momento, cada uno de los gobiernos sucesivos tendrían su propia lectura del conflicto armado, algunos buscarían compartir cosmovisiones con la política de contención al comunismo desarrollada por los Estados Unidos, encuadrando la confrontación en el marco de la Guerra Fría, mientras que otros lo delimitarían como un conflicto esencialmente interno (Borda, 2012). Esta dualidad definió los ciclos de auge militar o diálogos de paz entre el Estado colombiano y las guerrillas.

Con posterioridad a la terminación de la Guerra Fría, los conflictos armados internos comenzaron a trascender sus fronteras locales, impactando en mayor medida a la comunidad internacional (Trujillo, 2012), impactos que llevarían a la internacionalización de los mismos. Por internacionalización se entiende la definición explícita y consciente de un actor de involucrar a terceros en las dinámicas propias del conflicto armado doméstico (Borda, 2007). Este involucramiento de terceros en los conflictos armados internos, según los estudios en relaciones internacionales, pueden darse por tres motivos esenciales: espontáneo, voluntario o complejo. La vinculación “espontánea” se presenta cuando un tercer actor se interesa por las dinámicas del conflicto sin la intención de algunos de los actores internos, sea por motivos de seguridad o ayuda humanitaria. La vinculación “voluntaria” se origina cuando uno de los actores internos, guiados por sus necesidades políticas o militares, busca posicionar sus intereses en la agenda internacional. Finalmente, la vinculación “compleja” se ocasiona por los efectos involuntarios generados de las actuaciones voluntariamente producidas por unos de los actores internos (Niño, 2013).

Como se mencionó anteriormente, si bien hubo atisbo de internacionalización del conflicto armado colombiano, no fue sino hasta el año 1998, con la llegada del presidente Andrés Pastrana, que existió una declaración expresa de vincular a actores internacionales, a través de lo que se conoció como la Diplomacia para la Paz y el Plan Colombia. La política de Pastrana puede entenderse como una dualidad político-militar diferenciada, pero complementaria, que tuvo como objetivo principal la consecución de la paz con las FARC. Por una parte, obtuvo apoyos y legitimidad internacional al proceso de paz adelantado en la Zona de Distensión, y por otra, buscó el fortalecimiento de las Fuerzas Militares, “Plan B” que se concentró en la asistencia militar aportada por el gobierno de los Estados Unidos (Trujillo, 2012).

En este punto cabe preguntarse los motivos que llevaron al gobierno de Pastrana a internacionalizar el conflicto armado, a lo que Ana María Trujillo (2012), siguiendo la línea argumentativa de la autora Sandra Borda, afirma que dicho proceso puede explicarse en primer lugar, por la debilidad institucional incapaz de controlar el actuar de los grupos guerrilleros, los cuales controlaban grandes territorios de la geografía nacional. Por tanto, era imprescindible captar recursos que permitieran el mejoramiento en las capacidades de las Fuerzas Militares. Por otra parte, la presidencia de Pastrana encontró en el sistema internacional la posibilidad de legitimar un proceso de paz que enfrentaba dificultades y falta de apoyo en importantes sectores de la población colombiana, en especial, por el retiro de varios batallones ubicados en la zona de distensión, lo que le valió un fuerte choque con la

entidad castrense quienes se opusieron al despeje por considerar que era reconocer de facto el control de las FARC en dicha región (Trujillo, 2012).

Es así como desde el gobierno de Andrés Pastrana se busca posicionar en la agenda de la comunidad internacional los principales problemas que aquejan al país: el conflicto armado y el narcotráfico, ambos en una relación simbiótica e inseparable. Bajo esta premisa, el gobierno nacional hizo un llamado a la comunidad internacional para la realización de un “Plan Marshall” que permitiera el fortalecimiento institucional y la inversión social en las zonas afectadas por los cultivos ilícitos, dos fundamentos que serían el sustento de la Diplomacia para la Paz y el Plan Colombia. Sin embargo, el Plan Colombia soportó grandes modificaciones en su tránsito por el Congreso estadounidense, el cual le dio un enfoque principalmente militar y de seguridad al tema de la lucha contra los cultivos ilícitos (Trujillo, 2012). “Por tanto, aunque el Plan Colombia hacía parte de la estrategia de internacionalización política del conflicto, es decir, para comprometer a la cooperación internacional con el propósito de la paz estructural, la realidad es que terminó siendo la concreción de la internacionalización militar del Plan B” (Trujillo, 2012, p.593).

Por otra parte, mientras el proceso de paz del gobierno de Andrés Pastrana con la guerrilla de las FARC se debatía entre las encrucijadas propias de las dinámicas de negociación, acontecieron los actos del 11 de septiembre del año 2001 en la ciudad de New York, abriéndose así una nueva etapa discursiva en la agenda internacional y una nueva reelaboración en el entendimiento del conflicto armado colombiano. El derrumbe del World Trade Center implicó el desmoronamiento de una gran cantidad de usos de la política internacional, así como la reconstrucción de una agenda internacional ajena a los parámetros sobre los que se edificó la Guerra Fría. Este nuevo terrorismo sentó las bases de una restablecida arquitectura de la agenda internacional, siendo el justificante de las acciones de los Estados Unidos en materia internacional durante el gobierno de George Bush (Molina, 2003,). A nivel discursivo, esta nueva etapa de la agenda internacional trasciende a la ejecución de una contienda en contra del terrorismo, lo que permite denotar “la empresa de una guerra religiosa, que ha iniciado con el ataque a la población civil y los valores de los Estados Unidos de América” (Chihu, 2006)

Durante esta etapa, el presidente George Bush, hace un llamado a la identidad nacional, al tiempo que presenta a los Estados Unidos como una nación fuerte e inquebrantable ante las amenazas de sus enemigos (Chihu, 2006). De igual forma, el discurso de Bush delimitó la lucha global contra el terrorismo en la clásica contradicción “amigo-enemigo”, al tiempo que vinculó los problemas de seguridad

nacional como un apéndice de la seguridad global. Bajo estas premisas, la “cruzada en contra del terrorismo” puede ser leída como un retorno a la doctrina de la guerra justa, toda vez que los Estados Unidos recurren a una suerte de superioridad moral del mundo civilizado, que legitima la declaratoria de la guerra global bajo el amparo de una causa justa y una recta intención de los combatientes, quienes han de promover el bien ante la barbarie ejercida por los terroristas (Caro, 2006).

Es en este escenario donde evolucionó la internacionalización política y militar del conflicto armado por parte de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que tuvo como objetivo alcanzar la paz a través de la derrota militar a las FARC, motivo por el cual, a diferencia del proceso adelantado por Andrés Pastrana, la internacionalización de Uribe buscó la legitimación como herramienta para sumar asistencia militar, lo que explica la estrecha y casi exclusiva concentración de la política exterior colombiana hacia los Estados Unidos (Trujillo, 2012). Para Uribe sólo existía un “Plan B”, lo que eliminó la posibilidad de una eventual salida negociada a la guerra interna, encuadrando el conflicto armado colombiano como una lucha en contra del terrorismo de las FARC, compartiendo de este modo un mismo lenguaje con la “cruzada en contra del terrorismo” global promovida por el presidente George Bush, lo que le permitió aumentar y fortalecer la ayuda técnica y financiera para las Fuerzas Militares y de Policía. Por tanto, Uribe concilia las contradicciones existentes en el gobierno de Andrés Pastrana por medio de la reelaboración de un único discurso que sólo entendía la paz bajo la premisa de la derrota militar de la “violencia terrorista y narcotraficante de las FARC” (Trujillo, 2012).

La retórica del gobierno, consideraba a las FARC como una organización criminal que no sostenía otra motivación que los beneficios económicos resultantes del tráfico de drogas, por tanto, cualquier causa política y revolucionaria anticipada se había difuminado en el lucrativo negocio del narcotráfico. Lo anterior, acompasado por la afirmación gubernamental de que dichos grupos -como las FARC-, no eran otra cosa que grandes carteles y miembros de redes criminales internacionales que no estimaban otra finalidad que atentar contra las instituciones democráticas legítimamente establecidas (Borda, 2007). Cuando el gobierno de Uribe denominó a la guerrilla de las FARC como narcoterroristas, removió del imaginario social su carácter revolucionario y potencialmente transformador, lo que admitió el tratamiento militar con el objeto de eliminar la amenaza, al tiempo que reinventó el conflicto armado colombiano y lo ubicó como prioridad en la agenda regional de los Estados Unidos, permitiendo el ya conocido aumento en la ayuda militar, al tiempo que priorizó, en cierta forma, los estándares en la aplicación de derechos

humanos y legitimó la invitación de una mayor intervención de los Estados Unidos en el conflicto armado Colombiano (Borda, 2007).

EL DEVENIR DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI EN AMÉRICA LATINA Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO POR PARTE DE LAS FARC

En febrero de 1994, Mario Benedetti, frente al abandono de los principios socialistas por parte militantes políticos e intelectuales orgánicos escribió:

Es cierto que el arrepentimiento se ha convertido en una industria lucrativa. Todos los días nos enteramos de que algún político, algún intelectual, algún politólogo, algún economista y sobre todo algún oportunista concurren al confesionario del Imperio, o a alguna de sus parroquias de moda, con toda su filatelia de pecados (El País, 1994).

Arrepentimiento político que se produjo ante el avance de un capitalismo a la ofensiva y la retirada de un senil comunismo que cayó, como bloques de concreto, sobre las utopías de toda una generación comprometida con la transformación social. Sin embargo, mientras la izquierda europea desechó en el baúl de los recuerdos la foto del socialismo, la maltrecha izquierda latinoamericana, entre la confusión y el duelo, reagrupó sus fuerzas en el llamado Foro de São Pablo, instancia organizativa que sería el sustento de los debates del “Socialismo del Siglo XXI” y el auge de los gobiernos progresistas en la región veinte años más tarde.

Con la disolución de la URSS, el mapa geopolítico configurado a través de la bipolaridad, dio paso a un entramado internacional delimitado bajo la influencia innegable de los Estados Unidos. América Latina culminó la década de los noventa signado por la consolidación del recetario neoliberal, confeccionado desde Washington y desde las principales economías a nivel global en la década anterior, lo que trajo consigo tensiones y conflictividad social regional. Este proceso de apertura económica, reducción estatal y privatizaciones masivas crearon las condiciones para el reagrupamiento y redefinición de la izquierda latinoamericana, al permitir que algunos sectores populares no cayeran en un letargo desmesurado al oponer resistencia a la agenda global neoliberal.

Para James Petras, la izquierda contemporánea en América Latina ha atravesado por tres olas. La primera tuvo lugar entre los años 60 y terminó a mediados de los años 70. Este período se caracterizó por la acción de movimientos-masas, lucha

guerrillera y partidos con tendencia electoral. La segunda ola tiene su origen en el período posterior a las dictaduras, que tuvo como objetivos la oposición a los autoritarismos y la agenda neoliberal, agrupados principalmente en el Foro de Sao Paulo. La tercera ola, emerge sobrepuesta a las agrupaciones del período anterior pero con mayor capacidad de respuesta, toda vez que se encuentra conformada por campesinos, sindicalistas y estudiantes -entre otros-, de corte más local, autónomos políticamente y enfocados la mayor parte del tiempo en acciones directas. Esta nueva dirigencia no salió de los claustros universitarios, por el contrario, germinaron del movimiento social, con prácticas mucho más colectivas, anti personalistas y hasta cierto punto más éticas (1997).

En esta amalgama entre partidos de izquierda y movimientos sociales en oposición a los efectos negativos del Consenso de Washington, el pensamiento crítico latinoamericano paulatinamente va superando el fantasma de una cortina de hierro oxidada y la fatalidad de una historia que, según se afirmaban, había llegado a su fin (Fukuyama, 1994). Para estos pensadores, la guerra, la miseria y la dominación, son resultados de las estructuras sociales y la institucionalidad capitalista. Por lo anterior, se afirma que “la doble deficiencia estructural de la sociedad burguesa —ser anti-ética y disfuncional para las necesidades de las mayorías— la hace obsoleta y la condena a ser sustituida por el “Socialismo del Siglo XXI” y su nueva institucionalidad: la democracia participativa, la economía democráticamente planificada de equivalencias, el Estado no-clasista, y como consecuencia, el ciudadano racional-ético-estético” (Dieterich, 2003, p.3). Consecuentemente, el nuevo proyecto latinoamericano parte de la idea de que el subdesarrollo no puede ser rebasado sobre las relaciones capitalistas, toda vez que el subdesarrollo y la dependencia son el lugar asignado a la región en el entramado de relaciones económicas globales. Por tanto, esta “colonialidad” solo puede rehacerse superando las condiciones que la producen, siendo el socialismo y la creación de un bloque regional unificado con estrategia de desarrollo proteccionista, la única alternativa posible al subdesarrollo crónico (Dieterich, 2003).

Ciertamente no es posible afirmar que el “Socialismo del Siglo XXI” sea un proyecto acabado, de hecho, es viable la consideración de que sea un proyecto naciente y en construcción que se reflejó y se sigue reflejando en la pluralidad de procesos políticos acaecidos en los últimos años. Por otro lado, lo que sí es posible afirmar, es que con el “Socialismo del Siglo XXI” se persigue “el pleno desarrollo humano, no el desarrollo por el desarrollo, la economía por la economía o la política por la política. Todas las realidades cobran sentido cuando se las mira a la luz de la persona humana y su circunstancia histórico-

social concreta” (Hamburger, 2014, p. 142). Se habla de un nuevo diseño que debe sustentarse sobre valores y principios, un proyecto y un sujeto histórico, que no es otra cosa, que el ser humano ubicado en su condición social (Boron, 2008), superando así los errores históricos del socialismo anterior.

En contraposición al auge de los gobiernos progresistas en la región, Colombia experimentó la consolidación de un pensamiento conservador y antisubversivo expresado en la política de Seguridad Democrática adelantada por el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Es en esta contradicción donde las FARC han de buscar recuperar la legitimidad perdida al interior del país, inaugurando una etapa planificada de su política internacional. Dado su preponderante origen campesino, las FARC a lo largo de los años tuvieron una orientación eminentemente local, alejada de los escenarios internacionales. No obstante, como resultado de la fuerte exposición ante la comunidad internacional durante el proceso de paz con el gobierno de Andrés Pastrana, sumada a la creciente desventaja militar en la que paulatinamente ingresaron con posterioridad a la implementación del Plan Colombia, las FARC percibieron la necesidad de estrechar lazos con gobiernos de la región, en especial Venezuela y Ecuador (Borda, 2012), a fin de buscar reposicionamiento tanto a nivel político como militar, internacionalizar el conflicto y evadir la acción de la fuerza pública.

El trabajo internacional de la organización guerrillera fue desarrollado a través de los que se conoció como su Comisión Internacional, creada con posterioridad a la Octava Conferencia en 1993 y dirigida por Raúl Reyes hasta la fecha de su muerte. El trabajo internacional de la guerrilla estuvo enfocado principalmente en tres regiones: Centroamérica y el Caribe, Europa y Sudamérica. Los objetivos planteados para el frente internacional giraron en torno al reconocimiento del estatus de beligerancia, el intercambio humanitario, la oposición y aislamiento internacional del gobierno de Álvaro Uribe y la legitimación de la lucha armada desarrollada en Colombia (Trejos, 2013).

Si bien el trabajo internacional en Centroamérica tiene su origen en el año 1995, a partir de lo que se conoció como “Comité de Solidaridad con las Luchas del Pueblo Colombiano”, es a partir del año 2002 cuando lograron que el trabajo internacional fuera realizado ya no por guerrilleros colombianos sino por nacionales de los países donde tenían presencia, así las FARC lograron crear una cierta militancia internacional. Esto les permitió desarrollar un proselitismo político, como fue el caso de México y Costa Rica, en donde las FARC llegaron a tener oficina y una permanente actividad al interior de la comunidad estudiantil. En el caso europeo la insurgencia vio en los exiliados colombianos la oportunidad para desarrollar su

proselitismo político. Las FARC se concentraron en la denuncia de las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno colombiano, la corrupción institucional y los nexos con el paramilitarismo. Esto los llevó a tener para el año 2008 alrededor de 30 representantes, quienes fueron los encargados de realizar contactos con parlamentos y organizaciones en diferentes países de Europa (Trejos, 2013).

En el caso venezolano, las FARC encuentran en Hugo Chávez un gobierno ecléctico que llega al poder con un marcado distanciamiento de la política neoliberal (Rodríguez, 2010) y un discurso enraizado en la gesta bolivariana, lo que se tradujo en un permanente acercamiento entre el gobierno de Venezuela y la guerrilla de las FARC, materializándose en los reiterados apoyos por parte de Chávez al reconocimiento del estatus de beligerancia de las FARC y la fuerte participación en las liberaciones de secuestrados por parte de esta guerrilla, en la búsqueda del acuerdo humanitario. Estas cercanías discursivas evidencian la cosmovisión compartida entre Venezuela y las FARC, lo que permitió la introducción de terceros en las dinámicas del conflicto armado (Borda, 2012).

En cuanto al gobierno del Ecuador, Rafael Correa alcanza la presidencia luego de reelaborar el sistema de significantes sociales que se desestructuró con la crisis financiera e institucional a inicios de nuevo siglo, y a confeccionar una nueva hegemonía anclada en la idea de recuperar la nación (Plaza, 2016). Con el triunfo de Correa, las FARC obtuvieron someramente, un cierto reconocimiento político y la declaración oficial de neutralidad por parte del Estado ecuatoriano al conflicto armado interno en Colombia. Sin embargo, más allá de las posibles cercanías, estas no se tradujeron en una ayuda decidida por parte del gobierno ecuatoriano hacia las FARC (Trujillo, 2012). Empero, sí permitió a esta guerrilla hacer de la frontera ecuatoriana un territorio propicio para su actuar político militar y de estrecha relación con el narcotráfico, con algunos sectores del gobierno y organizaciones sociales, en su expansión delictiva de la Coordinadora Continental Bolivariana.

EL MOVIMIENTO CONTINENTAL BOLIVARIANO

Los cambios en la conformación ideológica de los gobiernos de la región durante el período de estudio, llevaron a las FARC a reafirmar sus objetivos políticos a través de la implementación de las armas. Para la dirigencia fariana, este giro hacia la izquierda en la región, representaría puntos a su favor para obtener el tan anhelado estatus de beligerancia y el aislamiento político del gobierno de Álvaro Uribe. Sin embargo, la diversidad de postulados y la falta de homogeneidad política de estos

gobiernos, no permitieron a las FARC entablar un mismo nivel de interlocución con los distintos mandatarios, representando así una desventaja y por ende un detrimento dentro sus objetivos políticos (Pizarro, 2011). A pesar de lo anterior, “la solidaridad bolivariana” encarnada por el proyecto geopolítico venezolano, le proporcionó a las FARC la posibilidad de introducirse en la escena internacional con mayor contundencia (Pécaut, 2008).

Para el proyecto geopolítico de Hugo Chávez, el conflicto de las FARC le permitía a Venezuela reposicionarse en la esfera internacional a través de la reconstrucción nacional y la redefinición de la geopolítica latinoamericana, sobre la base de la integración regional y las estructuras multilaterales. Lo anterior, debía edificarse sobre dos niveles: el simbólico y el económico. A nivel simbólico el anti-imperialismo fungió como elemento identitario en rechazo a la hegemonía estadounidense histórica en la región. A nivel financiero, el proyecto venezolano se sustentó a partir de la Alianza Bolivariana para los pueblos de América (ALBA) y Petro Caribe, organizaciones que permitieron a Venezuela posicionarse en instancias regionales como UNASUR (Agulló, 2012).

Así las cosas, la estructura guerrillera logró desplegar una ‘para-diplomacia’ caracterizada por el trabajo descentralizado, con la utilización de tecnologías de la comunicación que permitieron promulgar su ideario a través de agentes externos cercanos a sus propuestas programáticas. La discursividad anti-imperialista, bolivariana y socialista, también beneficiaba a las FARC y les permitió ingresar en el escenario regional a partir de la geopolítica bolivariana, sintonizándose principalmente con los gobiernos andinos alineados ideológicamente con el Socialismo del Siglo XXI. Este trabajo internacional le significó al grupo subversivo generar líneas de conexión en el mundo, crear redes virtuales como epicentros de circulación de información y propaganda política, así como la consolidación de apoyos regionales decididos a través del Movimiento Continental Bolivariano y el ALBA, redes de apoyo en la expansión del discurso bolivariano regional (Torrijos, 2012). Para el profesor Vicente Torrijos, las FARC al interior del Movimiento Continental Bolivariano, se entremezcló “con el discurso de revolución expansiva encabezado por el Gobierno Bolivariano de Venezuela, en su faceta de lucha política y militar” (Torrijos, 2012, p. 39).

La Coordinadora Continental Bolivariana tuvo su congreso fundacional en el año 2003 en Venezuela, durante el marco del Festival Mundial de la Juventud, por la iniciativa de organizaciones sociales de diversos orígenes. Su objetivo fue agrupar a las fuerzas revolucionarias latinoamericanas alrededor del pensamiento bolivariano

en el marco de la lucha anti-imperialista y revolucionaria. A esta organización habrían de adherirse las FARC desde el primer momento, siendo nombrados como presidentes honorarios Manuel Marulanda y Alfonso Cano. El segundo congreso se realizó en la ciudad de Quito en el año 2008, en donde Raúl Reyes intervino a través de un video enviado por la organización guerrillera. Para el año 2009, la coordinadora pasó a llamarse Movimiento Continental Bolivariano. Es de resaltar que la coordinadora permitió una proyección más regional de las FARC, agrupando los “Comités de Solidaridad” con las luchas del pueblo colombiano de carácter local, con los que las FARC iniciaron su trabajo hacia la segunda mitad de los años noventa (Trejos 2015). Este escenario permitió acumular importantes apoyos internacionales y la participación de miembros insurgentes en eventos políticos y académicos, propagando su visión del conflicto armado colombiano y su propuesta política.

EL GOBIERNO DE LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

En Colombia, la materialización de la “cruzada global contra el terrorismo” y el cierre de una eventual salida negociada al conflicto armado interno, llevó por nombre “Política de Defensa y Seguridad Democrática”, adelantada durante los gobiernos del presidente Álvaro Uribe y en cierta medida en los primeros años del gobierno posterior de Juan Manuel Santos. Según el documento marco, el objetivo general de esta política era:

Reforzar y garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio, mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática: del libre ejercicio de la autoridad de las instituciones, del imperio de la ley y de la participación activa de los ciudadanos en los asuntos de interés común”. (Presidencia de la República - Ministerio de Defensa, 2003, p. 12)

Bajo este entendido, la Seguridad Democrática formalmente se construyó sobre tres pilares: la protección de los derechos de los ciudadanos, la protección de los valores, la pluralidad y las instituciones democráticas, así como la solidaridad y la cooperación de toda la ciudadanía. Esta política definió como amenazas al Estado de Derecho el accionar de los grupos armados, catalogando como actos terroristas el tráfico de drogas y de armas, el secuestro, la extorsión y el homicidio. Por tanto, planteó como rutas de acción estratégicas la consolidación del territorio por parte de la institucionalidad, la protección de la población civil ante las amenazas, la erradicación del negocio ilegal del narcotráfico, el aumento y mantenimiento de la

capacidad disuasiva, y la transparencia en el manejo de las cuentas (Presidencia de la República, Ministerio de Defensa).

El gobierno de Álvaro Uribe fue ciertamente un gobierno de marcados contrastes. Por un lado, mantuvo una alta popularidad en las encuestas, así como el apoyo indiscutible de sectores hegemónicos. Por otro lado, enfrentó la férrea oposición de sectores sociales y gobiernos regionales, al tiempo que resistió fuertes cuestionamientos por la violación sistemática de DDHH, la infiltración “consentida” del paramilitarismo en las instituciones, y un dudoso proceso de paz con los paramilitares, en cuanto dicho proceso fue diseñado en lo concreto con nulas garantías a las víctimas (La Silla Vacía, 2017).

Así las cosas, Álvaro Uribe es elegido presidente al representar una opción discursiva signada por la categoría “Seguridad” como derrotero indiscutible de su política gubernamental, lo que implicó a su vez, la reelaboración del modelo estatal, llevada a cabo a través de reformas constitucionales (Pilar, 2004). Reformas que sentaron las bases para una tensión social que habría de desarrollarse a lo largo de su presidencia.

El período que corresponde a la implementación y consolidación de la política de Seguridad Democrática, es el eterno retorno de una contradicción inmanente en las democracias modernas, entre los sectores sociales que consideran el respeto indubitable por los DDHH y las libertades, la unidad básica sobre la cual se debe sentar las bases del Estado de Derecho, y aquellos que juzgan necesaria la limitación de las garantías individuales como posibilidad auténtica de consolidar un estado real y solidario (Pilar, 2004). Álvaro Uribe, en su inclinación por eliminar a los grupos armados, en especial la guerrilla de la FARC, se inscribe en este segundo grupo, pues considera la limitación de las libertades individuales como condición *sine qua non* para materializar su cosmovisión “compartida” de Seguridad (Pilar, 2004).

La readecuación del marco constitucional abrió la posibilidad para una reelaboración del lenguaje estatal y la consolidación de la categoría “terrorismo” como estructura discursiva en el direccionamiento de la categoría de enemigo, indispensable en la legitimación de una guerra institucional y militar contra las FARC. Si bien la calificación de las FARC como grupo terrorista se da una vez terminados los diálogos del Caguán, es a través de Álvaro Uribe donde adquiere su mayor desarrollo. El éxito de la discursividad contra el terrorismo se da porque las FARC son eliminadas paulatinamente como actor válido en el entramado de

relaciones políticas, sociales y económicas de la sociedad colombiana. El terrorista pierde su humanidad y producto de su locura adquiere una conducta criminal y amenazante de la sociedad, dejando de ser un “nosotros”, para convertirse en un “ellos” que no es otra cosa que un “eso”, al perder su condición humana (Angarita *et al*, 2015).

En esta disputa por el espacio político, Uribe no sólo busca desnaturalizar la acción armada y política de las FARC, sino que cierra la capacidad interlocutoria de esta guerrilla en el espacio de lo público, al desdibujar no sólo su acción como grupo insurgente sino su validez como proyecto político revolucionario. De esta manera, Álvaro Uribe y su política de Seguridad Democrática elaboran una realidad de la institucionalidad colombiana, como una democracia en permanente profundización, que obstruye la posibilidad de desarrollar la lucha armada como forma de acción política.

Y es una democracia que todos los días se ha perfeccionado más, que cuando quiera que se haya detectado una talanquera al ejercicio democrático, se ha superado. Es una democracia sin límites, sin veniales hostilidades a la expresión del pensamiento crítico [...] Cuando hay un Estado constituido institucionalmente para garantizar el ejercicio pleno de la democracia, no se puede admitir la legitimidad de la oposición armada [...] Diría yo que el reto del mundo contemporáneo es derrotar el terrorismo ejercido por los grupos opositores o por el Estado. Y cuando el Estado está comprometido con la transparencia, nada implica ni justifica el terrorismo de los grupos opositores, sus acciones violentas (González, 2003, p, 76).

En concordancia con la afirmación anterior, Uribe expone en el foro universitario *¿Amenaza terrorista o conflicto interno?* del año 2005, lo siguiente:

Por eso he dicho: en Colombia hay un problema social muy grave que tenemos que resolver, pero la acción de los violentos no la podemos enmarcar ni definir como una acción dentro de un conflicto armado interno. Es una amenaza terrorista contra un Estado que está profundizando la democracia pluralista (Uribe, 2005).

La política de Defensa y Seguridad Democrática logró crear en el imaginario colectivo de grandes sectores de la población colombiana, la idea generalizada de

un fantasma terrorista que atentaba contra los valores y la existencia misma de la democracia colombiana, por tanto, es requerimiento patriótico desplegar una guerra decidida, ya no contra una guerrilla campesina de noble causa sino contra una red criminal y narcotraficante. De esta forma la relación entre el concepto de terrorismo y las FARC se hace inevitable, cerrándole a su vez los espacios políticos al interior del país. A esta política, las FARC intentarán buscar alternativas de repliegue, reacomodo y apoyo, generando una yuxtaposición de varios elementos discursivos que confronten el discurso hegemónico que nace en el vientre mismo de la fuerza estatal como instancia preeminente de conducción social.

EL NARCOTRÁFICO

El éxito en la caracterización y creación del enemigo interno por parte del gobierno nacional, que definió a las FARC como una organización narco-terrorista carente de cualquier motivación política, llegó a su punto de mayor auge en las marchas del año 2008, en donde más de un millón de personas manifestaron entre otras cosas “¡Las FARC: no son un ejército del pueblo!” (Aguilera, 2012, p. 169). Este proceso de deslegitimación social fue la concreción de un permanente rechazo que tuvo su origen en la década de los noventas, cuando las FARC comenzaron a mostrar una mayor capacidad militar. La brecha que paulatinamente fue separando a la guerrilla de la población civil puede explicarse no sólo por los efectos discursivos y simbólicos de la política de Seguridad Democrática, sino también porque las mismas FARC acumularon un permanente repudio por la implementación de cuestionados métodos de guerra como los secuestros indiscriminados, la utilización sistemática de cilindros bombas y minas antipersonas, así como su decidido ingreso en la cadena productiva del narcotráfico (Aguilera, 2012).

El narcotráfico, que para la organización subversiva significó el aumento sostenido de su capacidad militar a nivel nacional, jugó en contra al propiciar el debilitamiento en su capacidad política, puesto que las dinámicas propias de esta actividad ilegal, llevaron a la guerrilla a postergar su trabajo político con el objeto de conseguir apoyos en la población, priorizando la acción militar como garantía para mantener el control territorial indispensable en la producción y exportación de narcóticos (Pécaut, 2008). Por este camino, el narcotráfico produjo el debilitamiento ideológico de varias de sus estructuras al enfocarse exclusivamente en actividades económicas. Este fenómeno fue posible en parte, por la autonomía de los mandos medios y la fuerte descentralización en la actividad económica de los frentes, que no tenían otro control financiero más que cumplir con las cuotas anuales establecidas

por el Secretariado. Lo anterior se evidencia en la permanente preocupación de Raúl Reyes hacia finales del año 2007, donde veía que la actividad narcotraficante de algunos de los comandantes imposibilitaba una reestructuración de la organización guerrillera que transitaba por momentos difíciles. Para Reyes, el narcotráfico hacía de la guerra un negocio y esta actitud llevaba a la posible destrucción de las FARC, por lo que un distanciamiento decidido con esta actividad ilegal resultaba perentorio (Reyes, 2007).

Ciertamente, el grupo insurgente nunca aceptaría su plena responsabilidad en el narcotráfico, afirmando a lo sumo el cobro de un impuesto por ‘gramaje’. Para el año 2003, las intervenciones de la guerrilla en estas actividades se calcularon en un 66%, tanto en la producción como en la comercialización de narcóticos (Policía Nacional, 2008). La vinculación de las FARC con el narcotráfico se reafirmó hacia el 2005, cuando la guerrilla aplicó en distintos lugares del país un modelo “agrícola cocalero”, el cual consistió en la “intimidación a cultivadores de Tolima, sur de Bolívar y Guaviare, para oponerse a programas gubernamentales, la entrega de bonos por pago para estimular los cultivos ilícitos, y la instalación de minas en áreas donde se planeaba erradicar” (Policía Nacional, 2008, p.319).

El control del narcotráfico y las zonas con presencia de cultivos ilícitos, se convirtieron para las FARC en una garantía de subsistencia frente a la implementación del Plan Patriota. Las Fuerzas Armadas, en un sentido inverso al planteamiento estratégico de la guerrilla -que partió de sus territorios de retaguardia en el suroriente colombiano buscaron proyectar su fuerza a través de la cordillera oriental para copar Cundinamarca y Bogotá-, actuaron del centro hacia la periferia, iniciando con la Operación Libertad I, donde 15.000 efectivos en un radio de 70.000 km², cerraron las posibilidades de esta guerrilla para llevar a cabo un paso decisivo en la culminación de su plan estratégico. El anterior proceso fue completado con el posicionamiento de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega en el corazón mismo de retaguardia estratégica de las FARC, comprendida por los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá, debilitando el accionar militar y financiero de esta guerrilla (Pizarro, 2011). Cerradas las puertas de Bogotá y ante las permanentes deficiencias económicas, el grupo subversivo buscó consolidarse en tres zonas específicas del territorio nacional, con la particularidad de ser los lugares con mayor cantidad de cultivos ilícitos y rutas de acceso al mercado internacional. Así las cosas, las FARC incrementaron sus vínculos con narcotraficantes, destinando un gran número de sus miembros al cuidado de cultivos ilícitos y al procesamiento de los mismos.

Así, la agrupación armada se reafirmó, en primer lugar, en el nororiente colombiano entre los departamentos de Arauca y Norte de Santander, región selvática que comparte frontera con Venezuela, pero que al mismo tiempo es la segunda región con mayor cantidad de cultivos de coca “pues solo entre 2011 y 2012 se cultivaron 2.340Ha en Tibú, 926Ha en Teorama, 1.848Ha en Sardinata, 976Ha en El Tarra y 536Ha en Convención” (Ríos, 2016, p. 227). En segundo lugar, se ubicaron en la zona amazónica comprendida por los departamentos de Meta, Caquetá y Putumayo, en donde el 100% de las actividades militares se dieron sobre enclaves cocaleros y se presentaron 30,000 Ha de cultivos ilícitos entre 2011 y 2012. Finalmente, el territorio del Pacífico comprendido por los departamentos de Nariño, Cauca y Chocó, extensión imprescindible para la exportación de narcóticos (Ríos, 2016). Estas dinámicas pueden ser rastreadas en la siguiente relación:

Gráfica 1: Presencia armada de las FARC en relación a los municipios con presencia de cultivos ilícitos 2001-2012

Gráfica elaborada por Jerónimo Ríos de información extraída de la base de datos de ODHDIH y UNODC, 2016

La anterior gráfica evidencia que la recuperación territorial de las FARC durante los años 2008 y 2012 se da en la relación entre la ubicación de sus estructuras y los municipios con presencia de cultivos ilícitos, lo que permite afirmar que las actividades del narcotráfico fueron fundamentales en el accionar guerrillero. La misma relación se establece al examinar sus actividades militares:

Gráfica 2: Acciones armadas de las FARC sobre escenarios con presencia de cultivos ilícitos 1998-2012

Gráfica elaborada por Jerónimo Ríos de información extraída de la base de datos de [ODHDIH](#) y [UNODC](#), 2016

Al evaluar la proporción en la relación tanto en el año 2003 y el año 2012, se constata que la viabilidad de la lucha armada por parte de la estructura armada sólo fue posible en una imbricada vinculación con la producción y comercio de drogas. Esta relación se convirtió en un lastre, debido a que la guerrilla cayó en una espiral en donde su potencial militar y subsistencia a la ofensiva oficial dependió del narcotráfico, lo que jugó en detrimento de su legitimidad política e integración como guerrilla revolucionaria. Las FARC resistieron a la política de Seguridad Democrática replegando sus estructuras guerrilleras a los enclaves donde el cultivo de drogas y la situación geográfica resultaban favorables. Este aislamiento de los centros urbanos significó una pérdida en su capacidad política, que intentaría ser recuperada a partir del “Plan Renacer Revolucionario de las Masas” a través del Partido Comunista Clandestino Colombiano y el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, sin embargo, los altos ingresos del narcotráfico para una guerrilla que perdió en alguna medida su rumbo político, repercutió irremediabilmente en la preponderancia y degradación de su actividad militar, lo que llevó a las FARC a la ‘narcotización’ de una gran proporción de sus frentes guerrilleros, los cuales se enfocaron en imponer su dominio sin tomar en cuenta las opiniones de las poblaciones sujetas a estas dinámicas (Pécaut, 2008).

ESTRUCTURA DISCURSIVA DE LAS FARC

La política puede ser entendida como el espacio variopinto de posturas contradictorias, afines o neutrales que emergen e interactúan, dando como resultado un momento político concreto. La contextualización anteriormente desarrollada, da cuenta de que el período estudiado en este capítulo, se estructura políticamente a partir de la discordancia entre un discurso hegemónico global de lucha contra el terrorismo, con sus implicaciones en el direccionamiento de la política occidental a nivel internacional y un correlato local, así como el distanciamiento ideológico, a nivel latinoamericano, que permitió la reedición de discursos sociales alternativos.

Este movimiento dialéctico condicionó el discurso de una guerrilla urgida por sintonizar con los requerimientos dados por el momento histórico. Es decir, encontrar cohesión interna en momentos cuando sus estructuras político-militares afrontaron la arremetida estatal en todos los órdenes y amenazaron con fracturar, por primera vez en su historia, la unidad de cuerpo que permitiera continuar con su accionar militar y mantener la verticalidad en la conducción. Durante este período, las FARC buscan resistir al plan de guerra propuesto por el gobierno nacional en la perspectiva de readecuar sus tácticas de guerrilla con miras a un posible escenario de desgaste, en donde la acción de las Fuerzas Militares encontrara un estancamiento que dejara preservar su plan estratégico, situación que los llevó al repliegue, postergando indefinidamente un escenario de avanzada militar.

Si bien las FARC se han dado a conocer como una insurgencia de extracción comunista, fiel tanto en su componente orgánico como político a los principios constitutivos del marxismo-leninismo, su discurso puede ser interpretado como la cambiante amalgama entre una perspectiva socialista de la realidad, una reinención del pensamiento bolivariano, y la yuxtaposición de símbolos que configuran el devenir de la política cotidiana. En otras palabras, si bien los principios básicos de la proyección política de la guerrilla han sido bastante rígidos a lo largo de los años, su capacidad inventiva los llevó a encontrar las muchas posiciones posibles de un mismo discurso, que se adecuó a cada uno de los momentos históricos que fueron afrontando. De allí, la necesidad de explorar la forma como ajustaron su narrativa a los tiempos de la Seguridad Democrática y las posteriores negociaciones de paz en La Habana, análisis que se realizará a continuación.

UN ARQUETIPO LLAMADO SOCIALISMO

“¡Por la Nueva Colombia, la Patria Grande y el Socialismo!” es quizá una de las consignas que con mayor frecuencia se puede percibir en los documentos e intervenciones de las FARC. Sin embargo, al analizar las plataformas políticas que han propuesto a la sociedad colombiana a lo largo de los años, tales como las “Doce propuestas para construir una estrategia de paz”, la “Plataforma para un gobierno de Reconstrucción y Reconciliación Nacional”, la “Agenda Común para el Cambio hacia una Nueva Colombia”, o la “Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia”; no es posible acentuar una idea elaborada de socialismo. Estas plataformas políticas, por el contrario, podrían ser entendidas como propuestas coyunturales que buscan, a lo sumo, solucionar las problemáticas más acuciantes de la población colombiana en materia de la salida negociada al conflicto armado, impuestos, medio ambiente, corrupción, doctrina militar, democracia, etc. Pero, ¿Qué papel juega el socialismo en la elaboración discursiva de la organización guerrillera?

Una posible respuesta, es que se constituye en una suerte de *Ethos*, ese conjunto de rasgos que dan carácter y sentido a una determinada comunidad. El socialismo se convierte en una utopía, no por su imposibilidad, sino por su posibilidad futura y lugar imprescindible a donde debe desembocar la lucha armada. La carencia de una propuesta concreta para la materialización del socialismo por parte de las FARC, no es la ausencia de una propuesta programática, por el contrario, es la reafirmación que para la guerrilla, el socialismo es el elemento identitario, que llena de sentido su lucha, toda vez que los ubica en la otra orilla, desde donde pueden observar un capitalismo decadente y plantear su superación. El socialismo llena de perspectiva estratégica a la organización insurgente y delimita el marco interpretativo de la realidad, lo que a su vez dará razón y sustento a los demás elementos discursivos de las FARC.

Así las cosas, el segundo elemento para una organización que hace del socialismo su bandera y se inscribe en la tradición del marxismo, es la lectura de la realidad social a través de la contradicción consustancial al desarrollo histórico, es decir, la contradicción de clase. Esto puede verse en las proclamas del Secretariado de las FARC:

Vestido de paisano, pistola al cinto, baja la montaña un campesino digno, seguido de un ejército de hombres y mujeres, que fusil en mano, se aprestan a liberar la más grande, noble y justa de todas las batallas: liberar la patria de la opresión imperialista y la expoliación oligárquica

para construir la “Nueva Colombia”. Ejércitos de campesinos, obreros, estudiantes, empleados, amas de casa, indígenas, negros, mulatos, zambos y mestizos. “Ejército del pueblo” (Secretariado, 2008, p.1).

Así hablaban las FARC de Manuel Marulanda y en su reflejo de sí mismas, de esta forma inscriben el conflicto social y armado colombiano en la contradicción entre un sector hegemónico, representado por la dualidad jerarquizada entre el imperialismo y la oligarquía nacional, y un sector subalterno, expresado en la humildad de un pueblo que busca la liberación. Batalla que se caracteriza por su grandeza, por su nobleza, pero, sobre todo, por su justicia.

El tercer componente que se desprende de la perspectiva socialista de la guerrilla es la idea de justicia, como razón última de toda lucha revolucionaria y justificación de la vigencia histórica del proyecto armado.

La subversión contra el Estado, el derecho a subvertir y ser rebeldes contra el orden capitalista mantienen toda su vigencia, mientras la voz herida e indignada de los de abajo, mientras la ronca voz de la gente del común, siga gritando que cesen ya las injusticias y que las puertas de la democracia plena sean abiertas de par en par (Secretariado, 2014, p. 90).

De esta manera, la justicia es el verbo rector de la lucha armada, la motivación misma del socialismo como probable modo de producción capaz de generar la mayor felicidad posible para una sociedad. La justicia legitima el uso de las armas, pasando al sector hegemónico la responsabilidad de la guerra interna, al ser dicho sector el causante de la injusticia. A través de esta argumentación, las FARC pretenden ubicarse en un lugar de inimputabilidad frente al uso de la violencia. La idea de la justicia como valor sublime del relacionamiento social, permite hablar de socialismo como imaginario de equidad colectiva y elabora una defensa de la causa revolucionaria que se sustenta a sí misma en el tiempo, toda vez que la injusticia crónica la reinventa permanentemente.

El cuarto componente para una organización que propone el socialismo como alternativa viable al capitalismo, es el debate insoslayable de la toma del poder, debate sin el cual la posibilidad real del proyecto político pasa a ser tan sólo una ilusión. En consecuencia,

Las FARC-EP nunca renunciarán a sus convicciones y principios revolucionarios y ratifican una vez más, que como organización

política-militar alzada en armas contra el Estado colombiano, seguirán adelante sin que nada ni nadie la detenga en su lucha por conquistar el poder político para gobernar a Colombia (Secretariado, 2002).

De igual manera, en otro documento afirman que:

El problema de fondo en este debate político es la cuestión del poder, eje central de la revolución en cualquier país del mundo. Contrariamente a las visiones posmodernas que proponen cambiar el mundo sin tomar el poder, las FARC piensan que no hay cambios posibles de fondo, estructurales, a largo plazo, si se elude el problema de la tomar del poder (Salgari, 2014, p.156) Manuel para principiantes.

Por ello, para las FARC fue indispensable proyectar un plan estratégico y construir la organización pertinente que dé cuenta de los propósitos planteados, teniendo en cuenta que han expresado a la sociedad la determinación de sus objetivos. Más allá de exponer nuevamente las directrices principales que componen dicho plan, lo importante es ver cómo ello juega un papel determinante en el discurso de las FARC durante la temporalidad que se asume aquí. Ante los permanentes golpes político-militares durante la implementación de la Política de Seguridad Democrática y la distante posibilidad de alcanzar el equilibrio estratégico, las FARC, al menos a nivel del discurso político, proyectan dos imágenes principales. En un primer momento, las FARC niegan permanentemente la efectividad de la Política de Seguridad Democrática y el Plan Patriota.

Ni el fracasado Plan Patriota ni los posteriores operativos militares de exterminio contra nuestra organización ejecutados por Álvaro Uribe con su amo y padrino George Bush, lograron impedir la movilización de los integrantes del Estrado Mayor Central junto a las unidades guerrilleras de los bloques, durante varios meses con la finalidad de estudiar y discutir las tesis y documentos centrales preparados por el secretariado del Estado Mayor Central (Secretariado, 2007 a, p.1)

De otra parte, corre el 2007, momento en el cual los operativos militares avanzan sobre las zonas de retaguardia estratégica de la guerrilla, mientras Álvaro Uribe consolida su popularidad y la de su política de Seguridad Democrática. Más allá de la realidad o falacia en las afirmaciones de las FARC, la organización guerrillera proyecta signos de seguridad y fortaleza al asegurar haber realizado la Novena Conferencia Guerrillera, un espacio de trascendental importancia y profundo

desgaste logístico, que en principio no podría realizar una subversión que no controla territorio o presenta dificultades orgánicas. De igual forma, cuando los ataques del Ejército golpean a los miembros del Secretariado, las FARC, aunque en algunos casos reconocen los daños causados, pasan a la “ofensiva” criticando al Presidente Uribe por la ilegitimidad de los ataques, al tiempo que entienden los retrocesos militares como parte de la lógica natural de toda confrontación armada, en contravía a las consignas del “fin del fin” proclamada por el gobierno nacional. Es por esto que en los comunicados de las FARC se pueden encontrar pasajes tales como:

La alevosía del ataque, la perversidad y el cinismo mentiroso de Álvaro Uribe para deformar las circunstancias de la muerte del comandante Raúl, no solo tensionan peligrosamente las relaciones de este gobierno con las repúblicas hermanas, sino que golpearon de gravedad las posibilidades del intercambio humanitario y anularon la salida política al conflicto con este régimen paramilitarizado y pro yanqui (Secretariado, 2008 e).

Esta actitud responde no solo la necesidad táctica de las FARC por mostrarse fuertes ante su enemigo, también es la reafirmación de su determinación de llevar a cabo el plan estratégico para la toma del poder, como posibilidad real de concretar un proyecto socialista. El socialismo como guía irrenunciable opera en las FARC como sustento moral, en momentos de fuerte desestabilización como el año 2008, cuando afrontaron sistemáticamente duros golpes y se proyectaba por parte del gobierno el inicio del quiebre definitivo de la organización guerrillera, lo que permite traer a colación la siguiente afirmación:

Las FARC surgidas del ataque militar a Marquetalia en 1964 son una respuesta popular legítima a todas las violencias del Estado. Mientras se mantengan las causas políticas, económicas y sociales que la generaron, la lucha armada nunca perderá vigencia. Nos alzamos en armas por la paz con justicia social, y triunfaremos. Habrá nuevo poder, Nueva Colombia, Patria Grande y Socialismo (Secretariado, 2008 d).

Finalmente, una organización de afiliación leninista no puede entenderse a sí misma sin la existencia de un partido político como cohesionador de la política y su acción de masas. Es así como en una de sus cartillas de propaganda afirman:

Las FARC-EP se definen como un partido político en armas. Un partido comunista de inspiración marxista, leninista y bolivariana. Su estructura

política responde a los principios leninistas de organización adaptados a la realidad colombiana. Cada escuadra de combate funciona como una célula de partido político (Salgari, 2014, p.156).

Esta perspectiva de entenderse a sí mismo no sólo como un ejército del pueblo, sino como un partido en armas, es una postura un tanto innovadora, puesto que en la tradición es el partido independiente el que orienta a la guerrilla. En el caso de las FARC, la estructura armada presenta dos caras, donde las escuadras guerrilleras son células de un partido político. Así se evidencia la naturaleza de una organización, que una vez distanciada del Partido Comunista Colombiano, no pretende abandonar su bagaje doctrinario. Para las FARC, el Socialismo como tradición de pensamiento y cosmovisión del mundo, mas no como realidad concreta del momento actual, da forma y sentido a su realidad política.

EL BOLÍVAR DE LAS FARC

Son bien conocidas las afirmaciones negativas realizadas por el joven Karl Marx sobre Simón Bolívar -prócer de la gesta independentista suramericana-, afirmaciones negativas que hicieron carrera en gran parte de los marxistas latinoamericanos, que fieles al pensamiento del padre del materialismo histórico, vieron en Bolívar la concreción de un ideario conservador y retardatario. Sin embargo, en Colombia el pensamiento bolivariano ha sido objeto de permanentes relecturas, que ven en Bolívar la representación de un proyecto político revolucionario. Uno de los primeros marxistas que se aparta decididamente de las apreciaciones de Marx fue Gilberto Vieira, secretario general del Partido Comunista Colombiano durante casi medio siglo. Para Vieira, el ser marxista no implica la aprensión de un dogma, el marxismo es una guía para la acción. Por ello, en su artículo “Sobre la estela del libertador” -publicado como folleto en 1942-, afirma que haciendo uso del materialismo histórico es posible evidenciar la imposibilidad de Marx para realizar una lectura acertada de Bolívar, debido a la escasa información que sobre el prócer existía en la Biblioteca británica. Por tanto, Marx cae en un lugar común al realizar una lectura apresurada y juvenil propia de la época, al no ser consciente de las posibilidades del momento político dado, que condicionaron la transformación de Bolívar en dictador. Esta postura es importante ya que desde allí las FARC sentarán las bases para la construcción de su imaginario bolivariano.

Aunque las FARC no son la primera guerrilla en hacer uso de la imagen de Bolívar, sé son los primeros en hacer una elaboración compleja del mismo. La

apropiación que la guerrilla hace del prócer, es la necesidad por fijar la lucha armada en una memoria extensa (Olave, & Narvaja, 2016). La organización insurgente establece mediante esta acción, un puente entre su lucha revolucionaria y un pasado olvidado, para reinventarse como la continuación de una gesta emancipadora inconclusa. Las FARC dejan de hablar desde sí para hablar con y a través de Bolívar. Por este camino, Manuel Marulanda es mostrado como el prócer campesino designado por la mano del libertador para retornar su espada en los campos de batalla. De igual forma, el proyecto geopolítico bolivariano aporta al discurso fariano la posibilidad de entroncar con los gobiernos progresistas de la región, al coadyuvar en una estrategia de internacionalización a través de las posibilidades que ofrece la discursividad en torno a la unidad de los pueblos latinoamericanos (Olave, & Narvaja, 2016).

En el plano político-organizativo, las FARC, mientras se desarrollaban los diálogos del Caguán, dieron origen en el año 2000 a lo que se conocería como el “Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia”, con lo que la guerrilla oficializaba su adopción del pensamiento Bolivariano como sustrato ideológico, al tiempo que buscó crear un movimiento político clandestino que abriera el espacio nacional y permitiera la convergencia de sectores sociales en favor de su plataforma política. La guerrilla afirmó poner toda su experiencia y capacidades para crear un movimiento político alternativo a los partidos tradicionales, a los que, desde el Manifiesto Bolivariano de 1997, consideran como los responsables de la violencia social (Medina, 2009). Esta plataforma se constituyó como la estructura política encargada de expandir al interior del movimiento social colombiano, el ideario bolivariano, sumando apoyos a la lucha insurgente.

CONTINUACIÓN DEL PROYECTO INCONCLUSO DE BOLÍVAR

El vínculo creado entre la agrupación armada y un pasado remoto, tiene su anclaje principal en las guerras de independencia lideradas por Simón Bolívar. Sin embargo, en el imaginario fariano la lucha por la emancipación se profundiza aún más en la historia, llegando a la génesis de la dominación occidental sobre los pueblos de América.

¿Por qué somos bolivarianos? Desde su origen, las FARC-EP, se han declarado continuadoras de las luchas adelantadas por los pueblos que han habitado el continente americano, comenzando por la resistencia indígena a la invasión europea, que se inicia con la llegada del Colón y su tropa de ex-convictos, la rebeldía de los esclavos negros que fueron

traídos de África para el trabajo en las minas, los levantamientos campesinos contra la opresión española, que alcanza en estos territorios un punto culminante en la gesta comunera, preámbulo de los que sería la guerra de independencia americana, que bajo la conducción de Simón Bolívar logra la victoria definitiva sobre la metrópoli en los campos de Ayacucho (Fierro, 2014, p. 49).

A través de este ejercicio discursivo, la organización armada se asigna un lugar en la historia y reinventa su propio origen, ya no es sólo la guerrilla definida por la reivindicación agraria en los tiempos de Marquetalia, manifiestan que desde su nacimiento tienen conciencia de la gran tarea que la historia les asigna: materializar la emancipación de un pueblo. De allí surge su conocida consigna “por la segunda y definitiva independencia”.

Las FARC -sin abandonar el marxismo-leninismo-, con Bolívar complementan y complejizan su acervo ideológico, al tiempo que profundizan sus raíces en una historia compartida por la sociedad colombiana. Pero quizá lo más importante es que para las FARC la lucha armada no deja que la historia independentista agonice, la historia se sigue escribiendo y son ellos sus escritores.

Son estas las tareas pendientes que tenemos por cumplir los verdaderos patriotas herederos de Bolívar, entre los que nos contamos orgullosos los integrantes de las FARC-EP, continuadores de su gesta. Por todo esto, por su desprendimiento de los bienes materiales, de los nombramientos y cargos burocráticos, por su disposición para el sacrificio, su ejemplo de lealtad a la causa patriótica y los intereses de los más humildes es que nos reclamamos bolivarianos y nos llenamos de orgullo de sabernos sus hijos (Fierro, 2014, p. 50)

La insurgencia engrandece a Bolívar, le asigna un fuerte componente ético, entregándolo a la causa de los desposeídos. Con este ejercicio discursivo, la política armada de las FARC adquiere de forma indirecta la misma legitimidad asignada al prócer, al ser los herederos de su lucha, legitimidad imprescindible en momentos cuando son considerados terroristas y su lucha política parecía desfasarse en la historia.

LA GUERRA NO DECLARADA: EL MITO DE MARQUETALIA Y LA GUERRILLA INVENCIBLE DE MANUEL

“La justeza de la lucha de Manuel es incuestionable”

(FARC, 2011, p. 25)

Bajo la premisa discursiva de las FARC, el papel asignado a Manuel Marulanda, “camarada del libertador”, es la de guía moral y promotor de la revolución colombiana (Olave, & Narvaja, 2016, p.192). Permitiendo mitificar, con posterioridad a su muerte, la imagen de un Manuel que justifica la narrativa fariana en momentos cuando es evidente el profundo desgaste político y militar al que han sido encaminados. Si la gesta de Bolívar da sentido histórico a las FARC, la lucha de Manuel reactualiza esta historia. “Era un líder natural salido del pueblo, convertido en el más grande estratega de la guerra de guerrillas en el continente. Fue Manuel un creador: creador de ejércitos revolucionarios, de combatientes, de estados mayores insurgentes y de estrategias de victoria popular” (FARC, 2011, p. 79).

Durante el periodo de tiempo analizado en este capítulo las FARC intentan exculparse a sí mismas de su responsabilidad en la prolongación del conflicto armado colombiano, alegando sus orígenes como resistencia agraria. Para la organización guerrillera, la guerra inició producto de la violencia estatal y los intereses desmedidos de una oligarquía que impuso con sus acciones, la lucha armada como forma principal de resistencia del campesinado. Así las cosas, las FARC sólo son víctimas de una historia escrita por la contraparte. Hablando de Marulanda afirman que “Obligado por la violencia del Estado tuvo que cambiar la cadencia de sus acordes por la cadencia de fuego de un fusil” (FARC, 2011, p.31).

Este volver reiterado a su origen, responde a un discurso oficial que los vacía de sentido y los dibuja como un cartel narcoterrorista extraviado en la historia. Si la guerra nació como resultado de unas condiciones sociales determinadas, la lucha armada se justifica hasta que las mismas no sean superadas. Para la guerrilla “las razones de la lucha que hoy llevan adelante las FARC-EP, son las mismas que le dieron nacimiento en 1964” (Salgari, 2014, p.14).

Bajo esta lectura de la realidad colombiana y del conflicto armado, una vez solucionada por parte de las FARC la problemática de su validez histórica, construyen una narrativa que busca cohesionar y blindar a su estructura guerrillera

de la avanzada política y militar del Estado colombiano. Esta narrativa gira en torno a dar confianza en la imposibilidad de la derrota producto de la guía inquebrantable de Manuel.

Marulanda fue original, auténtico. Siguió el camino de sus propios pensamientos, de sus reflexiones. Tomando los elementos del acumulado de su experiencia fue elaborando una doctrina militar insurgente que ha probado en el campo de combate su eficacia. Sin duda, sus estudios de los procesos revolucionarios fortalecieron su concepción táctica y estratégica, su talento militar y político proveniente esencialmente de su profundo análisis de la operatividad enemiga de la que extrae conclusiones que convierte en directrices, no sólo para neutralizar el esfuerzo adversario, sino para superarlo y derrotarlo en el teatro de la contienda. En realidad, Marulanda fue un talentoso comandante rebelde egresado con las más altas calificaciones de la escuela de la experiencia (FARC, 2012, p.11).

Esta percepción de Marulanda, da a las FARC la confianza necesaria en su operatividad militar, ya que, según su experiencia, el accionar guerrillero es el resultado de conjugar todas las formas de lucha y de cambiar espacio por tiempo sin alterar el objetivo final de la toma del poder por la vía armada. Con esto tratan de evitar convertirse en un objetivo militar fácilmente neutralizable, y se camuflan entre la población y la problemática social. Su accionar delictivo es el resultado del análisis reflexivo y adaptabilidad en el campo de combate, así como de la experiencia de fuego acumulada. Prueba de ello -según las FARC-, son los muchos años que Manuel Marulanda sorteó las incursiones militares y planes de guerra del gobierno colombiano: “Genio de Marquetalia, genio en Río Chiquito, genio en los Llanos, invencible director de la resistencia al Plan Patriota y que les hizo morder el polvo de la derrota a más de cuatro generaciones apátridas que adelantaron la guerra sucia contra nuestro pueblo, defendiendo intereses antinacionales” (FARC, 2011, p. 7).

Con este discurso las FARC intentan proyectar una imagen de fortaleza ante la derrota producto de los fuertes golpes propinados por el Ejército Nacional. En esta proyección reafirman su naturaleza cambiante como organización guerrillera y sus capacidades de adaptación a las nuevas condiciones de la guerra planteada por el gobierno colombiano.

La resistencia de las FARC al Plan Patriota es un homenaje de pólvora y combate a Manuel Marulanda. El cambio de Táctica es la movilidad completa. In memoriam, en combate homenaje al comandante, los guerrilleros reciben al ejército en su táctica de guerra de guerrillas móviles. Los comandos aparecen y desaparecen, atacan por sorpresa. Planifican muy bien sus movimientos y exploraciones. Ubican al enemigo, y cuando éste se pone en movimiento, entran en acción. El ataque por vanguardia o retaguardia, o por los flancos, es una combinación letal de activación de minas con fuego de francotiradores. La movilidad permite a la guerrilla golpear al enemigo dentro y fuera del teatro de operaciones (FARC, 2012, p. 13).

La representación de un Bolívar que vuelve a los campos de batalla producto de la fenomenología del conflicto, así como la transformación del discurso y un Manuel dispuesto a empuñar su espada, es la narrativa que elaboran las FARC en busca de abrir el ya cerrado espacio político, y esbozar la idea de una guerrilla en resistencia que no se desmorona entre la ejecución de un plan de guerra demoledor. Más allá de lo real o imaginario del universo fariano y la capacidad de su discurso para incidir en la sociedad colombiana; es de destacar la capacidad adaptativa que recurre a elementos discursivos para generar una narrativa que cohesiona y da sentido aparente a su accionar político y armado.

COYUNTURA: LA DISPUTA POR EL ESPACIO POLÍTICO

La conocida frase de Carl Von Clausewitz, de que “la guerra es la continuación de la política por otros medios”, aplica para los años que van desde la implementación de la Política de Seguridad Democrática hasta la primera firma de los acuerdos de La Habana realizada en la ciudad de Cartagena. Son la expresión armada del auge en la lucha por la apertura o la clausura del espacio político conveniente entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano.

Con la creación del “Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia” y el impulso al Partido Comunista Clandestino Colombiano, las FARC son conscientes como marxistas-leninistas, de que el éxito del plan estratégico sólo es posible en la medida que su propuesta logre anidar en la conciencia de las masas y la sociedad civil, no solo porque ello garantizaría el apoyo necesario para la campaña militar, sino porque las FARC en su acervo leninista entienden la toma del poder como

una insurrección armada, es decir, entienden que el elemento determinante en la consecución de una situación insurreccional, es el pueblo y no la capacidad militar de la guerrilla. De igual forma, el gobierno de Uribe con la Política de Seguridad Democrática, comprendió que el éxito de una campaña anti-insurgente no podía sustentarse exclusivamente en el plano militar. Así las cosas, es necesario recorrer la argumentación que utilizó la guerrilla al intentar fracturar el discurso de la lucha contra el terrorismo que los ubicó en un espacio fuera de lo político.

CARACTERIZACIÓN DEL GOBIERNO DE ÁLVARO URIBE

La caracterización del enemigo por parte de las FARC, estaba marcada por la representación de un contradictor demente, perverso, carente de humanidad. Así, el discurso en el escenario de la contienda bélica sirve para descalificar al otro. Este razonamiento hace necesario actuar para atajar al enemigo, desarmarlo y de ser necesario, eliminarlo (Angarita et al, 2015).

Una de las primeras calificaciones que realizó la organización subversiva sobre Álvaro Uribe, se relaciona estrechamente con la alianza militar existente entre el gobierno de Colombia y los Estados Unidos, que se materializó a través del fortalecimiento del Plan Colombia y la concreción del Plan Patriota. Para las FARC, la nación fue entregada a los caprichos del “imperio” ante la falta de carácter de un presidente sin dignidad, falto de sentimiento patriótico. De esta forma, Uribe es modelado como un gobernante pusilánime y perverso, incapaz de direccionar al país de forma autónoma, motivo por el cual no se podía esperar una política favorable para los intereses de los desprotegidos. En este orden ideas, afirman que “En el plano regional e internacional, Uribe ha sido y sigue siendo el más fiel sirviente de Washington, interpretando a la perfección el papel de administrador sumiso de un protectorado yanqui” (Secretariado, 2004), fortaleciendo con este discurso no solo el sentimiento antinorteamericano, sino su alineación ideológica con el socialismo del Siglo XXI, que se encontraba en plena vigencia y crecimiento regional. Un dirigente capaz de atentar en contra de sus propios ciudadanos, en aras de acatar las directrices de un gobierno extranjero, fácilmente es convertido en punta de lanza para atajar a los gobiernos progresistas de la región. Esta caracterización fue elaborada por las FARC con el objeto de aislar y restar apoyos regionales a la política de Seguridad Democrática, en momentos en que la región se consolidaba hacia la izquierda. “Desafortunadamente la injerencia de los Estados Unidos en los asuntos internos de Colombia pretextando la lucha contra el terrorismo como política hegemónica contra gobiernos democráticos y progresistas en cabeza del presidente Uribe” (Secretariado, 2007).

Las FARC intentaron generar una idea negativa de la alianza político militar entre el gobierno colombiano y el estadounidense, al considerarla como la causa de una gran cantidad de males que aquejaban al país, que van desde la crisis ambiental generada por el saqueo de las multinacionales, hasta la violación sistemática de los DDHH. La organización armada, haciendo uso de su conocido antiimperialismo, buscó generar una base propicia para deslegitimar la fuente de apoyo y financiación que sustentó la política de guerra del Estado colombiano, al tiempo que generó desconfianza en los gobiernos de la región ante la posible injerencia de los Estados Unidos sus procesos políticos.

En este contexto, las FARC, al tiempo que caracterizaron a Álvaro Uribe como anti-patriótico y continuaron sus calificativos despectivos haciendo uso de los escándalos políticos que surgieron durante sus dos gobiernos -la infiltración del paramilitarismo en las instituciones estatales y el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales-. Lo designó como el representante de un gobierno mafioso y paramilitar, que buscó la eliminación de los sectores populares opuestos al régimen y copó la institucionalidad colombiana en una estrecha alianza con la ilegalidad. Con lo anterior, las FARC intentan deslegitimar el discurso oficial de guerra contra el terrorismo y encausar su lucha guerrillera en la oposición al “tirano”, exigiendo así su renuncia.

Se hunde inexorablemente en el fango de la parapolítica, en la sangre de más de 150 mil víctimas del paramilitarismo y hace caso omiso del sufrimiento de más de 4 millones de desplazados mientras arropa con el manto de impunidad a sus socios narco paramilitares, peor aún, balbucea su cínico lenguaje “antiterrorista” para descalificar la rebelión legítima del pueblo colombiano (Secretariado, 2008 a).

De este modo es posible percibir la nueva tendencia discursiva de las FARC hacia su principal contrincante, donde se hace mención incluso de peticiones puntuales para desinhibir su papel como gobernante, ejemplo de ello reluce en un nuevo comunicado donde se refleja un claro juego de palabras frente a la política de desmovilización gubernamental, “Álvaro Uribe debe renunciar a la presidencia, desmovilizarse del paramilitarismo y someterse a la justicia” (Secretariado, 2008 b)

Finalmente, uno de los elementos más importantes en la discursividad guerrillera ubicada en abierta contradicción con la política de la Seguridad Democrática, fue la reelaboración del principio marxista de la lucha de clases a través de los lentes del ideario bolivariano. Las FARC, retrotrayendo la guerra a los conflictos políticos fundacionales de la república colombiana, afirman que el país se encuentra dividido,

ya no entre proletarios y burgueses, sino entre bolivarianos y santanderistas. En carta dirigida al gobierno de Daniel Ortega afirman: “El Estado colombiano es hijo de Santander, el falso héroe nacional que confabulado con la secretaría de Estado de los Estados Unidos mató a Bolívar y destruyó su proyecto de conformación en este hemisferio de una gran nación de repúblicas” (Secretariado, 2008 c).

En otro aparte del mismo comunicado declaran:

De Santander descenden el actual régimen de las oligarquías que masacró a más de 1500 trabajadores bananeros en 1928 en defensa de los intereses económicos de la *United Fruit Company*. Esta oligarquía liberal conservadora desató en la década del 50 la violencia partidista que asoló campos y ciudades produciendo la muerte de 300 mil colombianos, aniquiló toda una generación de revolucionarios barriendo a tiros a la Unión Patriótica, movimiento político alternativo al que le fueron asesinados cerca de 5 mil de sus dirigentes sindicales y populares y ha adoptado espantosas masacres de ciudadanos y provocando mediante el terror el desplazamiento forzoso de más de 4 millones de colombianos (Secretariado, 2008 d).

Reinventado el conflicto como uno que comienza en Marquetalia, pero que se extiende hasta los orígenes mismos del Estado colombiano, la insurgencia llena de sentido la lucha de clases, la diversifica e introduce a la sociedad en una guerra épica que debe ser superada para romper el ciclo histórico de opresión. Santander, como fantasma, retorna de la mano de las oligarquías y se instaura en la miseria del pueblo. Las FARC como hijas de Bolívar, se funden en un pueblo épico imaginado y lideran una guerra que habrá de concluir en un gobierno de mayorías, donde el proyecto inconcluso ha de ser culminado por ellos, con el apoyo y concurso de sus aliados ideológicos, especialmente regionales alineados con la Coordinadora guerrillera, Coordinadora continental y Movimiento Continental Bolivariano.

LA NECESIDAD POLÍTICA DEL ACUERDO HUMANITARIO

Uno de los temas reiterativos en los documentos de la guerrilla durante la casi totalidad del período estudiado, es la necesidad de avanzar en la concreción de un acuerdo humanitario ante la inminencia de una derrota militar. Este acuerdo cumpliría con varios objetivos prioritarios: neutralizar la grave afectación que estaba teniendo la organización por incremento masivo de las desmovilizaciones como

parte de una estrategia del gobierno liderada por la fuerza pública y el retorno de los combatientes a sus hogares, alejarse del área de influencia del derecho internacional y en especial de corte penal internacional, buscando convertir a través del acuerdo humanitario, los delitos considerados por la comunidad internacional como delitos de lesa humanidad en delitos políticos, y por último crear las condiciones necesarias para avanzar en una posible salida negociada al conflicto armado.

Sin embargo, más allá del discurso de carácter humanitario y de la presión de carácter regional y vecinal, el intercambio fue la estrategia con mayores resultados políticos, impulsada por las FARC en la búsqueda por el reconocimiento de beligerancia. El acuerdo humanitario le permitió a la guerrilla abrir espacios políticos a nivel internacional, cerrados tras la introducción de la insurgencia en la lista de organizaciones terroristas, y a la vez recibir apoyos de gobiernos regionales. Así, el acuerdo humanitario fue una disputa por recuperar parte del espacio político perdido e impulsar la salida negociada del conflicto. Esta estrategia política tuvo un cambio radical en el imaginario colectivo a partir del año 2007 con el asesinato de los 11 diputados del Valle el Cauca. Comenzó a tener relevancia en la opinión pública colombiana, así como la intervención del gobierno de Hugo Chávez y de los bloques de poder regional, presionando el intercambio humanitario y el presidente de Francia Nicolás Sarkozy, quien abogó por la liberación de Ingrid Betancourt (Pécaut, 2008).

La guerrilla desarrolló toda una campaña de intimidación y explotación de operaciones de información y comunicación, empleando las redes de apoyo del Partido Comunista Clandestino para manipular a la opinión pública y ratificar su voluntad de hacer un intercambio de prisioneros por razones humanitarias. Bajo la lógica discursiva de este grupo subversivo, la guerra en Colombia, como todas las guerras, era una donde cada una de las partes capturaban prisioneros, por tanto, como en los conflictos regulares, es natural que los combatientes deseen recuperar a sus iguales. Estas ratificaciones manipuladas de buena voluntad, rememoran en la población los vínculos familiares, pretendiendo cargar de sentimientos y nobleza su determinación humanitaria.

Las cartas enviadas a ustedes por los familiares de los prisioneros, en las que solicitan sus buenos oficios en el objetivo de conseguir la liberación de sus seres queridos, con las gestiones emprendidas, nos alientan a ratificar una vez más nuestra inquebrantable voluntad de acudir a formar el canje de prisioneros con el gobierno (Secretariado, 2005).

Sin embargo, ante la permanente negativa oficial, la guerrilla, retomando el discurso de la sumisión del gobierno exponen: “lo habíamos dicho, Uribe no estaba programado por Washington ni para el canje humanitario ni la paz de Colombia” (Secretariado, 2007 b).

De esta forma, las FARC trasladan la responsabilidad de la prolongación del sufrimiento tanto de prisioneros como de sus familiares al gobierno. Al tiempo que pretende generar un distanciamiento entre los mandos del ejército y sus soldados a raíz del secuestro masivo de miembros de la Fuerza Pública en campos de concentración guerrillera.

La propuesta de un despeje por 72 horas que está siendo difundida por algunos medios, es apócrifa. No tiene origen en las FARC. Sin embargo, dio pie para que el señor comandante de las Fuerzas Militares mostrara todo su desprecio por la suerte de sus soldados prisioneros (Secretariado, 2004 b).

Lograr que el gobierno hablara de intercambio humanitario, era la aceptación tácita de un conflicto armado. Entender el acuerdo como resultado de un diálogo, de un acuerdo político, implicaba fisurar el calificativo nacional e internacional de terroristas que sobre las FARC pesaba. Esta política tuvo su momento álgido cuando se manifestó el apoyo resuelto ofrecido por el gobierno venezolano y los bloques de poder regional como el Alba o Unasur, lo que menguó con la neutralización operacional y muerte de algunos miembros del secretariado.

CARACTERIZACIÓN DEL GOBIERNO DE JUAN MANUEL SANTOS

El gobierno de Juan Manuel Santos se caracterizó por tener un estilo marcadamente diferente al de su antecesor. Santos proyectó una forma de entender la acción política mucho más conciliadora, evitando la confrontación directa con los sectores de oposición, eludiendo así, según su parecer, desgastes políticos innecesarios. Esto propició a inicios de su gobierno, el aumento en la movilización social en la búsqueda de la paz. Lo anterior, sumado al reconocimiento de la existencia del conflicto armado como base de su estrategia política, abrió la posibilidad para hacer las aproximaciones con la organización subversiva y concretar la posibilidad y búsqueda de una salida negociada del conflicto armado de las FARC con el gobierno nacional.

Si bien la guerrilla consideró a Juan Manuel Santos como la continuación del proyecto “mafioso y paramilitar” de Álvaro Uribe, su caracterización fue un tanto diferente, en cuanto definió a Santos por su componente de clase, toda vez que lo entienden como un presidente proveniente de una familia tradicional representante de los intereses norteamericanos y el capital financiero. Exponen las FARC “no hay duda, estamos frente a un gobierno de clara estirpe reaccionaria, representado por un alto exponente de las más rancias oligarquías colombianas, garante seguro desde hace más de dos siglos, de los intereses del imperio en el continente” (Secretariado, 2011 a). En el mismo sentido afirman:

Su ropaje demagógico llamando a conformar una falsa “Unidad Nacional” caracterizada por el apoyo incondicional a un orden social desigual e injusto, apuntalando en el militarismo y en la cohesión ideológica de los grandes medios de comunicación para garantizar la impunidad, no es más que otro engaño para ocultar la imposición de nuevas medidas anti-populares que ya vienen en marcha (Secretariado, 2011 a).

Para la guerrilla, los intentos de Santos por construir al inicio de su gobierno una gran coalición de partidos que permitiera viabilizar su plan de gobierno, no es un llamado a la unidad popular, por el contrario, es una unidad desde la élite con el objeto de profundizar las problemáticas sociales y el conflicto armado, en beneficio de su clase. Las FARC no ven en Santos la posibilidad de un gobierno inclinado hacia los intereses de los sectores populares, razón por la cual convocan a la movilización social. Sin embargo, producto de los acercamientos secretos para la elaboración de una eventual agenda de paz, estos llamados jugaron un doble papel: por un lado, la ganancia de reivindicaciones sociales concretas, y por el otro, ambientar un escenario de paz en donde al entender de las FARC, se disputarían los cimientos de la transformación social.

Convocamos a todo el pueblo a la acción y a la movilización, para enrumbar a la nación por el camino de la solución política y dialogada, imponiendo reglas fiscales cuyo propósito consista en beneficiar a los más desprotegidos, con gravámenes más altos para los que mayores ganancias adquieran (Secretariado, 2011 b).

En el anterior comunicado del Secretariado, la guerrilla llama a luchar por una reforma tributaria progresiva, por una reforma a la salud, por la sanción de la

Ley de restitución de tierras, por la protección de los recursos naturales y por la derrota de la política de Seguridad Democrática, rebautizada como Unidad Nacional. La guerrilla entiende la movilización social como un escenario necesario para la lucha que han de desarrollar en el marco de una eventual negociación, en donde la correlación de fuerzas debía ser reorientada a su favor, siendo la protesta social su mejor canalizador.

Conforme se fueron adelantando los diálogos, el discurso guerrillero enfocó sus críticas a las incongruencias presentadas por la política de paz del presidente Santos, en una disputa política por reacomodarse al interior de las negociaciones, al intentar deslegitimar la capacidad de Santos para ejecutar las transformaciones necesarias que solucionen las problemáticas más acuciantes de los sectores populares.

“Suele decir que aspira a convertirse en el Presidente que consiguió pacificar el país y se declara amigo de buscar una salida política a la confrontación. Pero ni uno sólo de sus actos de gobierno ha demostrado algún propósito de atenuar las causas generadoras del conflicto” (Secretariado, 2012).

El discurso de las FARC durante la presidencia de Juan Manuel Santos, si bien recoge los elementos discursivos expuestos a lo largo del capítulo, no presenta la complejidad de las elaboraciones del período anterior, toda vez que las necesidades políticas de la guerrilla son diferentes, pasando de la resistencia militar a la incursión del espacio político, universo que paulatinamente eliminó desde la discursividad estatal la designación como organización terrorista, retornando la voz que habían perdido.

EL INICIO DE LAS NEGOCIACIONES DE PAZ

Analizar el contenido del acuerdo de paz en La Habana no es el objetivo de este apartado, es identificar cuál es el lugar que las FARC asignaron a los diálogos de paz al interior de su planteamiento estratégico. Entonces es imprescindible responder a este interrogante: ¿De qué manera esta guerrilla logra plantear la toma del poder a través de la confluencia entre la lucha armada y la búsqueda de una salida negociada al conflicto colombiano?

Para dar respuesta hace falta revisar algunas afirmaciones realizadas por la insurgencia sobre su plan estratégico. Para las FARC, su objetivo máximo es la toma del poder, a la cual pueden llegar por la combinación de dos vías: la lucha armada o las alianzas políticas.

En medio de esa disputa con el Estado colombiano y de la injerencia ahora directa de los Estados Unidos, las FARC complementan un plan de lucha armada con proyectos de alianzas políticas y sociales del movimiento popular. El objetivo es dirigido a crear una Asamblea Nacional Constituyente que defina un nuevo país y un nuevo régimen político, cambiando radicalmente las estructuras sociales y políticas del Estado (Salgari, 2014, p. 152).

Esta racionalidad es para las FARC completamente congruente, al no entender la revolución como un proceso lineal sino como la confluencia de luchas convergentes. Un acuerdo de paz, para el grupo guerrillero, adquiere una connotación especial, ya que deja de ser un espacio para la negociación de débiles reformas sociales y se transforma en la oportunidad de oponer una fuerza mayor, que a través del llamado al constituyente originario, reformule el equilibrio estatal. Así la confluencia de múltiples sectores sociales permitiría reinventar el poder y encaminar a la sociedad hacia la materialización del proyecto bolivariano. Las FARC son conscientes de que, en un escenario de lucha de clases, el solucionar las causas que originaron el conflicto implica la reingeniería del equilibrio de poderes. No es casualidad que la guerrilla en su discurso de Oslo afirmara:

Venimos a esta Noruega septentrional a buscar la paz con justicia social para Colombia por medio del diálogo, donde el soberano, que es el pueblo, tendrá que ser el protagonista principal. En él reposa la fuerza irresistible de la paz. Ésta no depende de un acuerdo entre voceros de las partes contendientes. Quien debe trazar la ruta de la solución política es el pueblo y a él mismo le corresponderá establecer los mecanismos que han de refrendar sus aspiraciones (Secretariado, 2012 b).

En esta afirmación las FARC buscan la apertura del espacio político al interior de las negociaciones, introducen al pueblo como fuerza determinante de la paz y asignan la libertad para refrendar, de la manera que mejor le convenga, sus propias definiciones. La insurgencia reitera una y mil veces que “la paz no significa el silencio de los fusiles, sino que abarca la transformación de la estructura del Estado y el cambio de las formas políticas, económicas y militares. Sí, la paz no es la simple desmovilización” (Secretariado, 2012 b).

Pensar en la paz como el redimensionamiento de la estructuración del Estado y el cambio en las formas políticas, económicas y militares, no es otra cosa que arrebatar el poder de aquellos que desde las gestas de Bolívar y su refundación en la resistencia de Marquetalia, en la narrativa fariana, han poseído el poder. Por eso las

FARC no se declaran una guerrilla derrotada porque su pretensión política requiere la fuerza de las armas.

La insurgencia armada motivada en una lucha justa no podrá ser derrotada con bombarderos ni tecnologías, ni planes por muy sonoros y variados que sean sus denominaciones. La guerra de guerrillas móviles es una táctica invencible. Se equivocan aquellos que embriagados de triunfalismo hablan del fin del fin de la guerrilla, de puntos de inflexión y de derrotas estratégicas, y confunden nuestra disposición al diálogo por la paz con una inexistente manifestación de debilidad. Nos han golpeado y hemos golpeado, sí (Secretariado, 2012 b).

Las FARC saben que han sido golpeadas, pero también saben que no fueron eliminadas, por ello declaran en su discurso en Oslo que “El Plan Patriota del Comando Sur de los Estados Unidos ha sido derrotado y la confrontación bélica se extiende hoy con intensidad por todo el territorio nacional” (Secretariado, 2012 b). La guerrilla necesitaba sentarse a la mesa superando la idea generalizada de su derrota, de otra forma, la correlación de fuerzas no sería la necesaria para avanzar en su planteamiento estratégico al interior de las negociaciones.

La inminencia de la derrota militar, la muerte algunos de sus principales cabecillas, la fragmentación ideológica, la pérdida y rechazo de la población civil por los niveles de degradación de su accionar subversivo, considerados como actos terroristas por la comunidad internacional, el estrecho vínculo como cartel con las redes de narcotráfico, los altos niveles de desertión, la pérdida de identidad ideológica, y el pasar a convertirse en el principal actor de los sistemas de inestabilidad delincuencia del país; fueron entre otros fenómenos los que llevaron a la guerrilla a replantear su estrategia. Los cambios de la política internacional y regional especialmente, también incidieron para que las FARC llegaran a la mesa de negociaciones, buscando la opción política de la salida del conflicto armado.

En la Novena Conferencia esta organización determinó como prioridad el fortalecimiento de la estructura de masas y la participación de la sociedad civil como la base de su estrategia. Así mismo, buscó a través del diálogo, la negociación, y la firma de los acuerdos, dar el salto estratégico del esfuerzo militar a la participación política directa, legitimar como delitos políticos su accionar delictivo, legalizar su estructura financiera vinculada al narcotráfico, obtener beneficios jurídicos que los alejen de las cortes y, a través de los puntos de los acuerdos de participación política, lograr la reforma rural integral y de cultivos ilícitos especialmente, convertir las

áreas de capacitación transitoria en las áreas de repliegue estratégico no solo para para la disidencia residual, sino para la concentración y despliegue de todas las manifestaciones de resistencia social frente al tema de narcotráfico, política de consolidación y restitución de tierras y territorios con sistemas de seguridad propios y autonomía administrativa.

Al término de los acuerdos de la Habana entre las FARC y el gobierno nacional, la Décima Conferencia de esta organización no solo confirma el alcance en los cambios de la estrategia para la toma del poder, sino la transformación y adaptabilidad discursiva en el nacimiento de un nuevo movimiento político que mantiene la estructura de masas, redes de milicias, disidencia armada, áreas de repliegue estratégico y recursos producto del narcotráfico.

CONCLUSIONES

El periodo estudiado es quizá el más complejo en la historia de las FARC, no sólo por la contundencia de la ofensiva militar por parte de las Fuerzas Militares, sino por la necesidad y decisión de transitar a un escenario de legalidad a través de un acuerdo de paz. Durante este lapso, las FARC lograron crear ante el imaginario colectivo un proyecto político posible, a través de la lectura permanente de los contextos internacionales, regionales y locales, favoreciendo la reelaboración de símbolos que evitaron su resquebrajamiento, construyendo así una narrativa que llenó de sentidos su proyecto político, aun en el aislamiento más profundo al que fueron arrastradas. La pérdida de la base ideológica, la división en las estructuras y mando jerárquico, y la “narco-bandolerización” registrada en los escritos de Raúl Reyes incautados por las autoridades, obligaban a cambios radicales urgentes no solo en el discurso sino en su estrategia político-militar y social.

Esta narrativa les permitió combinar distintas etapas de la historia política de las FARC, comenzando con el socialismo como discurso fundacional y estratégico, que introdujo a la organización en la cosmovisión de ser una guerrilla revolucionaria de izquierda. Esta elaboración discursiva continuó con la edición de un discurso bolivariano que permitió, no sólo colombianizar el socialismo, sino introducirse en la esfera de un proyecto geopolítico bolivariano y continental, siendo este el camino por el cual buscaron llenar de sentido su lucha armada, encontrando un lugar en la histórica de las luchas sociales en América Latina. Por último, la permanente caracterización e imaginación de un “enemigo del pueblo”, con lo que intentaron afrontar la coyuntura política.

No es posible afirmar que esta capacidad inventiva pueda ser trasladada al escenario político abierto, ya que las FARC pierden el lugar de enunciación que las distanció de ese otro al que siempre atacaron, para transformarse en un jugador más en la democracia. La narrativa analizada se agota en la lucha armada, porque pierde profundidad al interior del lenguaje institucional, donde los discursos y los imaginarios se construyen en claves diferentes.

Pueden surgir muchos interrogantes sobre las razones por las cuales, si la política de seguridad y defensa nacional estaba dando los resultados esperados, y las FARC se enfrentaban a una disyuntiva estructural ante la inminente derrota militar; el gobierno nacional buscó en las negociaciones de paz, la terminación del conflicto armado con esta organización, y por qué, aun a pesar que en el plebiscito de refrendación el pueblo colombiano expresó su desacuerdo a raíz de la falta de credibilidad en los compromisos de las FARC, se continuó con la implementación de los acuerdos.

También surgen dudas respecto a la evidente fractura de mando y liderazgo dentro de las FARC, entre un ala que busca la salida política del conflicto y un amplio sector que persiste en la opción militar para la toma del poder.

Si las FARC buscan reintegrarse al escenario de la legalidad política colombiana, ¿Cuál es el interés real del gobierno actual de Venezuela y Cuba con este proceso?, ¿Por qué persisten en la construcción de una estructura social que amenaza con la fragmentación del Estado y la declaratoria posible de la balcanización del territorio nacional?

¿Por qué tanto las disidencias de la FARC como las denominadas estructuras de amenaza residual de esta organización, están focalizadas en las mismas regiones en donde históricamente han mantenido estrecha relación con el narcotráfico y con las hoy consideradas áreas de repliegue estratégico o áreas prioritarias por el Estado y coinciden exactamente con las áreas de capacitación transitoria?